

LA AUTOMATIZACIÓN DE LA
DESIGUALDAD

HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA
AVANZADA PARA SUPERVISAR Y
CASTIGAR A LOS POBRES

Virginia Eubanks

Traducción de **GEMMA DEZA**

Capitán Swing 

de hambre, quién tiene vivienda y quién permanece sin hogar, y qué familias destruye el Estado. El asilo digital se inscribe en una larga tradición estadounidense. Tratamos a los pobres a título individual para eludir nuestra responsabilidad compartida de erradicar la pobreza.

Del asilo para menesterosos a la base de datos

« ¡ Voy a acabar en el asilo para pobres! ».

Hoy en día, la mayoría de nosotros hablamos de los asilos para menesterosos, los hospicios y las casas de la caridad de manera puramente metafórica, pero hubo un tiempo en el que estos lugares eran una realidad cotidiana, además de instituciones muy temidas. En su máximo apogeo, los asilos para menesterosos aparecían en postales y en canciones populares. Las sociedades locales organizaban excursiones para los ciudadanos caritativos y los típicos curiosos. Existen aún ciudades y poblaciones por todo Estados Unidos con calles bautizadas en honor a las casas de la caridad que acogieron a pobres en otro tiempo. Así, encontramos Poor Farm Roads (vías de la Granja de Pobres) en Bristol (Maine) y Natchez (Missisipi); County Home Roads (vías de las Casas del Condado) en Marysville (Ohio) y en Greenville (Carolina del Norte); y Poorhouse Roads (vías del Asilo para Menesterosos) en Winchester (Virginia) y en San Mateo (California). Algunas de esas calles se han rebautizado para ocultar su pasado: así, la Poor House Road o «calle de la Casa de la Caridad» de Virginia Beach es hoy la Prosperity Road o «calle de la Prosperidad».

El asilo de pobres de mi ciudad natal, Troy, en Nueva York, se construyó en 1821. Y aunque la mayoría de sus residentes estaban demasiado enfermos o eran demasiado viejos o demasiado jóvenes para realizar tareas físicas, los internos capacitados trabajaban en una granja de sesenta y una hectáreas y en una cantera de las proximidades, de donde la institución obtuvo su nombre: Rensselaer County House of Industry (Casa de la Industria del Condado de Rensselaer). John Van Ness Yates, a quien el estado de Nueva York encargó llevar

a cabo una investigación durante un año sobre el «Auxilio y asentamiento de los pobres» en 1824, utilizó el ejemplo de Troy para defender que el Estado debía construir un asilo para menesterosos en cada condado. Y se siguió su recomendación: en menos de una década se habían instituido cincuenta y cinco asilos municipales en Nueva York.

A pesar de las predicciones optimistas de que los asilos proporcionarían auxilio «económico y humanitario», lo cierto es que aquellas instituciones inspiraban terror entre los pobres y las personas de clase obrera, y con razón. En 1857, una investigación legislativa reveló que la Casa de la Industria confinaba a los enfermos mentales en cuarenta y una celdas de 2 por 0,6 metros durante períodos de tiempo ininterrumpido que podían alcanzar los seis meses. Y dado que dormían sobre paja y no contaban con instalaciones sanitarias, en invierno el cuerpo les quedaba recubierto de una mezcla congelada de paja y orines, de la que solo se desprendían «cuando se descongelaba», lo cual provocaba incapacidades permanentes.

«Las condiciones generales del asilo descritas son lamentables en todos los sentidos —publicaba el *Troy Daily Whig* en febrero de 1857—. El sistema de contratos, por el cual el mantenimiento de los menesterosos se cede al mejor postor, es en gran medida el responsable de ello. [...] El sistema está podrido de arriba abajo». El director del asilo del condado, Justin E. Gregory, obtuvo el contrato de la Casa de la Industria prometiendo cuidar de sus pobres mediante la inversión de un dólar semanal por cada uno de ellos. El contrato, por su parte, le garantizaba poder hacer un uso ilimitado de los internos como mano de obra. Aquel año, la granja del hospicio generó dos mil dólares en beneficios a través de la venta de hortalizas cultivadas por pobres que se morían de hambre.

En 1879, el *New York Times* informó en portada de que un «círculo de asilos» estaba vendiendo los cadáveres de los internos de la Casa de la Industria fallecidos a médicos del condado para su disección. En 1885, una investigación por mala gestión sacó a la luz la malversación de veinte mil dólares del Departamento de Ayuda a la Pobreza del condado de Rensselaer, lo que forzó la dimisión del administrador del asilo, Ira B. Ford. En 1896, su sustituto, Calvin B. Dunham, se suicidó después de que se desvelaran nuevas irregularidades financieras.

En 1905, la Junta de Organizaciones Benéficas del estado de Nueva York abrió una investigación que reveló la existencia de abusos sexuales desenfrenados en la Casa de la Industria. La enfermera Ruth Schillinger declaró que un auxiliar médico llamado William Wilmot tenía la costumbre de propasarse con las pacientes. Los enfermos insistían en que Wilmot había violado a Mary Murphy, que sufría parálisis. «Al escuchar pasos en el pasillo, dijeron: “Ya está ahí de nuevo Wilmot” —testificó Schillinger—. Al día siguiente encontré a la mujer con las piernas separadas, y ella no podía abrirlas, porque era paralítica».¹

En su defensa, John Kittell, el administrador de la Casa de la Industria y jefe de Wilmot, aseguró que su gestión había ahorrado al condado «unos cinco mil o seis mil dólares al año» al reducir los costes del cuidado de los enfermos. No se presentaron cargos contra Wilmot y no se adoptó ninguna medida para mejorar la situación hasta 1910. El asilo de Troy permaneció abierto hasta 1954.

Aunque los edificios de los asilos para menesterosos se han demolido, su legado pervive en los sistemas de toma automatizada de decisiones que enjaulan y atrapan a los pobres actuales. Bajo su lustre de alta tecnología, los sistemas de gestión de la pobreza —tanto la toma automatizada de decisiones como la minería de datos y los análisis predictivos— guardan un parecido asombroso con las casas de la caridad del pasado. Las herramientas digitales actuales se sustentan en opiniones punitivas y moralistas de la pobreza y configuran un sistema de contención e investigación con tecnologías avanzadas. El asilo digital disuade a los pobres de acceder a los recursos públicos; supervisa su trabajo, su gasto, su sexualidad y la crianza de sus hijos; intenta predecir su comportamiento futuro, y castiga y criminaliza a quienes no acatan sus dictados. Y, en el proceso, crea distinciones morales cada vez más afiladas entre los pobres que merecen recibir ayudas y los que no, con categorizaciones que demuestran nuestro fracaso como país a la hora de cuidarnos los unos a los otros.

¹ Junta Estatal de Organizaciones Benéficas, 1905.

Este capítulo ilustra cómo hemos llegado hasta aquí: cómo el asilo para menesterosos de ladrillo y cemento se metamorfoseó en sus descendientes basados en los datos. El periplo de todo el país desde el asilo para menesterosos municipal del siglo XIX hasta el asilo digital actual pone sobre la mesa un debate de una duración extraordinaria entre quienes desean erradicar y aliviar la pobreza y quienes culpan, encarcelan y castigan a los pobres.

El primer asilo para menesterosos de Estados Unidos se erigió en Boston en 1662, pero fue en la década de 1820 cuando el encarcelamiento de los indigentes en instituciones públicas se convirtió en el método principal aplicado en el país para regular la pobreza. El impulso para ello fue la catastrófica depresión económica de 1819. Después de un período de extravagante especulación financiera tras la guerra de 1812, el Second Bank of the United States estuvo a punto de declararse en bancarota. Se hundieron negocios, los precios agrícolas cayeron en picado, los salarios descendieron hasta en un 80 por ciento y los precios inmobiliarios se desplomaron. Medio millón de estadounidenses, cerca de una cuarta parte de la población masculina adulta libre, perdieron sus empleos. Pero a los analistas políticos no les preocupaba tanto el padecimiento de los pobres como el auge del «pauperismo» o la dependencia de las ayudas públicas. Especial inquietud generaba la ayuda «externa» en forma de alimentos, combustible, atención médica, vestimenta y otros artículos básicos que se entregaban a los pobres «fuera» de los confines de las instituciones públicas.

Diversos estados encargaron informes acerca del «problema de la pobreza». En Massachusetts designaron a Josiah Quincy III para que elaborara uno de estos informes. Vástago de una influyente y acaudalada familia unionista, Quincy tenía la voluntad sincera de aliviar los padecimientos, pero consideraba que la pobreza era el resultado de los malos hábitos personales, no de los impactos económicos. Y resolvió esta contradicción planteando que existían dos clases de pobres. Los pobres «incapaces», escribió en 1821, eran «completamente incapaces de trabajar, ya fuera por su avanzada edad, por hallarse aún en la infancia, por estar enfermos o por

padecer alguna debilidad corporal», mientras que los pobres «capaces» simplemente eran unos holgazanes.²

Para Quincy, la causa del problema de la pobreza eran las propias ayudas que se daban a los pobres, ayudas que se distribuían de manera indistinta entre incapaces y capaces. Sospechaba que ese auxilio indiscriminado destruía la industria y la economía de la «clase obrera de la sociedad» y creaba una clase de pobres permanentemente dependiente. La solución que planteaba consistía en denegar «todas las ayudas públicas, salvo si se reúnen las condiciones de admisión en una institución pública [el asilo para menesterosos]».³

Y su argumento sedujo a las élites. Se construyeron al menos 77 asilos en Ohio, 79 en Texas y 61 en Virginia. En 1860, Massachusetts contaba con 219 asilos, uno por cada 5.600 habitantes, y Josiah Quincy pudo disfrutar de su jubilación tras una dilatada y gratificante carrera política.

Desde buen principio, los asilos cumplían objetivos irreconciliables que comportaron un sufrimiento atroz y costes cada vez más elevados. Por un lado, eran una institución semivoluntaria que proporcionaba atención a ancianos, personas con salud delicada, enfermos, discapacitados, huérfanos y enfermos mentales. Por el otro, sus penosas condiciones tenían como fin disuadir a los trabajadores pobres de que solicitaran ayuda. Esa finalidad socavó de manera drástica la capacidad de la institución para proporcionar cuidados.

Se exigía a los internos que pronunciasen el «juramento de los pobres», que los despojaba de todos los derechos civiles básicos de los cuales disfrutaban (en caso de ser hombres blancos). Los internos no podían votar, contraer matrimonio ni ocupar cargos públicos. En los asilos se separaba a las familias porque los reformistas de aquel entonces creían que era posible redimir a los niños pobres poniéndolos en contacto con familias ricas. De ahí que se separara a los hijos de los padres y se los enviara, o bien como

² Massachusetts General Court Committee on Paupers Laws and Josiah Quincy 1821, p. 14.

³ *Ibid.*, p. 10.

aprendices o criados domésticos, o bien a lugares remotos, en trenes de huérfanos, para ser empleados como mano de obra gratuita en granjas de pioneros.

Los asilos proporcionaban abundantes oportunidades para el enriquecimiento personal a sus administradores. Como parte de su salario, el administrador del hospicio podía hacer un uso limitado de los terrenos y de los internos como mano de obra. De ahí que muchas de las actividades diarias de la institución pudieran transformarse en negocios paralelos. A título de ejemplo, el administrador podía obligar a los internos a cultivar excedente de alimento para su comercialización o a realizar tareas de lavandería y remiendo adicionales con fines de lucro o bien cerrar contratos para enviar a los internos a trabajar como criados domésticos o como mano de obra agrícola.

Si bien algunos asilos eran relativamente apacibles, la mayoría de ellos estaban hacinados, mal ventilados y sucios, y resultaban insoportablemente calurosos en verano y mortalmente fríos en invierno. La atención sanitaria y la higiene eran inadecuadas y los enfermos carecían de provisiones básicas como agua, ropa de cama y prendas de vestir.

Ahora bien, aunque los administradores solían recortar gastos para ahorrar dinero, los asilos demostraron ser costosos. Los rendimientos prometidos por sus defensores requerían de una mano de obra sin discapacidades, pero el mandato de disuadir a los pobres «capaces» conllevaba en la práctica que la mayoría de los internos no estuvieran capacitados para trabajar. En 1856, cerca de una cuarta parte de los residentes en asilos para menesterosos de Nueva York eran niños; otra cuarta parte eran personas con trastornos mentales, ciegas, sordas o con retrasos de desarrollo, y el resto eran, en su mayoría, ancianos, personas enfermas, discapacitados físicos o madres pobres que estaban recuperándose de un parto.

A pesar de sus atroces condiciones, los asilos, en gran medida a causa de sus defectos, lograron generar en los internos una sensación de comunidad. Juntos trabajaban, soportaban el maltrato y el abandono, cuidaban de los enfermos, vigilaban los unos a los hijos de los otros, compartían comedor y dormían en dormitorios hacinados. Muchos utilizaban los hospicios de manera cíclica, por

ejemplo entre las temporadas de siembra o durante las épocas de declive del mercado laboral.

Los asilos para menesterosos fueron una de las primeras instituciones públicas integradas en Estados Unidos. En su libro de 1899 *The Philadelphia Negro*, W. E. B. Du Bois indicaba que los afroamericanos estaban sobrerrepresentados en los asilos de la ciudad porque los supervisores de los pobres, exclusivamente blancos, se negaban a concederles ayudas externas. Desde Connecticut a California, abundan en los libros de registro de los asilos residentes descritos como negros, mulatos, chinos o mexicanos. La integración racial y étnica de las casas de la caridad tocaba la fibra sensible a las élites blancas nativas. Tal como recoge el historiador Michael Katz: «En 1855, un crítico neoyorquino lamentaba que “las clases pobres de todos los colores, edades y costumbres compartan comida, mesa y dormitorio”».⁴

Los asilos no eran ni prisiones para deudores ni lugares de esclavitud. Las personas arrestadas por vagabundeo, ebriedad, sexo ilícito o mendicidad podían ser confinadas a la fuerza en ellos, pero muchos residentes se internaban de manera técnicamente voluntaria. El asilo era un hogar de último recurso para los niños cuyas familias no podían mantenerlos, para viajeros que atravesaban una mala racha, para personas ancianas y sin amistades, para madres abandonadas, solteras o viudas, para enfermos y discapacitados, para esclavos libertos y para inmigrantes y otras personas que vivían en los márgenes de la economía. Aunque la estancia más habitual no acostumbraba a llegar al mes, los internos ancianos y discapacitados solían permanecer en ellos durante décadas. La tasa de mortalidad en algunas instituciones rondaba el 30 por ciento anual.⁵

Los defensores de los asilos argumentaban que la institución no solo proporcionaba cuidados, sino que, en paralelo, inculcaba

⁴ Katz, 1996.

⁵ Un informe de 1857 revelaba que 50 de los 177 internos del asilo del condado de Ulster (Nueva York) habían fallecido durante el año anterior. Véase también David Wagner, *Ordinary People*: «Durante cerca de treinta años casi todos los centenares de niños expósitos enviados a Tewksbury [el hospicio de Massachusetts] fallecieron», Wagner, 2008, p. 25.

los valores morales del ahorro y la laboriosidad. La realidad era que los asilos eran instituciones que sembraban el terror y que incluso aceleraban la muerte. Tal como el historiador de los trabajos sociales Walter Trattner ha escrito, los estadounidenses de las élites del momento «creían que la pobreza podía y debía erradicarse [...] en parte permitiendo perecer a los pobres». El filósofo social del siglo XIX Nathaniel Ware escribió, por ejemplo: «Humanidad aparte, iría en el mejor interés de la sociedad acabar con todos esos zánganos».⁶

Pese al trato cruel que se dispensaba en ellos y a su elevado coste, los asilos para menesterosos de los condados fueron el principal método de gestión de la pobreza en Estados Unidos hasta la depresión económica conocida como el Pánico de 1873. El auge económico de la posguerra se derrumbó bajo el peso de la corrupción de la edad dorada del país. La especulación desenfrenada derivó en una serie de quiebras bancarias y el pánico económico desencadenó otra crisis catastrófica. La construcción de líneas de ferrocarril descendió en casi un tercio, prácticamente la mitad de los hornos industriales del país cerraron y centenares de miles de trabajadores perdieron su empleo. Los salarios cayeron, el mercado inmobiliario se desplomó y se sucedieron ejecuciones hipotecarias y desahucios. Los Gobiernos locales y las gentes corrientes reaccionaron estableciendo comedores sociales y casas con alojamiento gratuito, y distribuyendo dinero en efectivo, comida, ropa y carbón.

La gran huelga ferroviaria de 1877 dio comienzo cuando los trabajadores de la línea de Baltimore y Ohio supieron que iban a recortarles el sueldo de nuevo (a la mitad del salario de 1873), mientras que los accionistas del ferrocarril se llevaban a casa un dividendo del 10 por ciento. Los trabajadores ferroviarios se apearon de sus trenes, desacoplaron los motores e impidieron el traslado de mercancías a través de los territorios. Tal como explica el historiador Michael Bellesiles en 1877: America's Year of Living Violently, cuando se envió a la policía y el ejército con bayonetas y ametralladoras Gatling a poner fin a las protestas, los mineros y los

⁶ Trattner, 1999, pp. 53-54.

trabajadores de los canales se declararon también en huelga en solidaridad. Medio millón de trabajadores, entre jornaleros, capitanes de barcas, mineros, fundidores, operarios de fábricas y empleados en conserveras, acabaron abandonando sus empleos para sumarse a la primera huelga general de la historia de Estados Unidos.

Bellesiles explica que en Chicago los checos y los irlandeses, por lo general adversarios étnicos, se infundían ánimos mutuamente. En Martinsburg (Virginia Occidental), trabajadores ferroviarios blancos y negros cerraron juntos la estación. Las familias obreras de Hornellsville (Nueva York) enjabonaron las vías de la línea ferroviaria de Erie y cuando los trenes «esquiroleros» intentaron ascender una montaña, perdieron tracción y regresaron marcha atrás a la ciudad.

La crisis económica también afectó a Alemania, Austria-Hungría y Gran Bretaña. Para hacerle frente, los Gobiernos europeos instauraron el estado del bienestar moderno. En cambio, en Estados Unidos, los analistas de la clase media avivaron los temores a una lucha de clases y a una «gran oleada comunista». Tal como habían hecho tras el pánico de 1819, las élites económicas blancas reaccionaron a la creciente militancia de los pobres y la clase obrera atacando el bienestar. En esta línea, se preguntaron: ¿cómo puede comprobarse la legitimidad de las necesidades en una casa de huéspedes comunitaria? ¿Es viable obligar a trabajar y proporcionar sopa gratis al mismo tiempo? En respuesta a ello, un nuevo tipo de reforma social, el movimiento de la caridad científica, perpetró un ataque sin cuartel contra las ayudas públicas a los desfavorecidos.

La caridad científica, que pretendía ser una beneficencia con base científica, exigía el uso de métodos más rigurosos y fundamentados en datos para diferenciar a los pobres que merecían recibir ayudas de los que no. Las investigaciones en profunidad practicadas proporcionaban un mecanismo de clasificación moral y control social. Cada familia pobre se convirtió en un «caso» irresuelto; en los primeros años, la Sociedad de Organizaciones Benéficas incluso recurrió a policías municipales para investigar las solicitudes de ayuda. Así nació la asistencia social individualizada.

⁷ The Washington National Republican, 1877, citado en Bellesiles, 2010, p. 144.

Los servicios de asistencia social daban por sentado que los pobres no eran testigos de fiar; por ello corroboraban sus relatos con la policía, los vecinos, los comerciantes del barrio, los curas, los maestros de escuela, las enfermeras y otras instituciones de ayuda. Tal como recogió Mary Richmond en *Social Diagnosis*, su manual de 1917 sobre procedimientos de los servicios de asistencia social, «la fiabilidad de las pruebas en las que [los asistentes sociales] basan sus decisiones debería someterse al mismo control riguroso que las pruebas legales que presenta un abogado». ⁸ Por defecto, la caridad científica trataba a los pobres como delinquentes.

Quienes trabajaban en la caridad científica aconsejaban llevar a cabo una investigación en profundidad de las solicitudes de asistencia porque consideraban que existía una división hereditaria entre los blancos pobres que la merecían y los que no. Proporcionar asistencia a los segundos sencillamente les permitiría sobrevivir y reproducir una prole genéticamente inferior. Para los reformistas de clase media de la época, como el trabajador social científico Frederic Almy, el diagnóstico social era imprescindible porque «no se trata igual a las flores que a las malas hierbas». ⁹

El foco que el movimiento ponía en la herencia estaba influido por el movimiento de la eugenesia, sumamente popular a la sazón. La vertiente británica de la eugenesia, capitaneada por sir Francis Galton, instaba a la reproducción programada de las élites por sus «cualidades nobles». Ahora bien, en Estados Unidos, los partidarios de la eugenesia no tardaron en desviar su atención hacia la eliminación de lo que consideraban las características negativas de los pobres: su escasa inteligencia, su propensión a la delincuencia y su sexualidad sin restricciones.

La eugenesia creó la primera base de datos de pobres. Desde el laboratorio financiado por la Carnegie Institution en Cold Spring Harbor, Nueva York, y desde las oficinas de registros eugenésicos estatales que se extendían desde Vermont hasta California, se envió a científicos sociales por todo Estados Unidos a recabar información acerca de la vida sexual, la inteligencia, los hábitos y la

conducta de los pobres. Rellenaron extensos cuestionarios, sacaron fotografías, tomaron huellas digitales con tinta, midieron cráneos, contaron niños, dibujaron árboles genealógicos y cumplieron libros de registro con descripciones como «imbécil», «bobo», «ramera» y «dependiente».

La eugenesia fue un elemento importante de la ola supremacista que barrió Estados Unidos en la década de 1880. Se institucionalizaron las leyes de Jim Crow y se aprobaron leyes de inmigración restrictivas para proteger a la raza blanca de «amenazas externas». La eugenesia tenía como fin limpiar la raza colocando un foco clínico sobre lo que el doctor Albert Priddy denominaba la «clase holgazana, ignorante e indigna de blancos antisociales del Sur». ¹⁰ Tanto la eugenesia como la caridad científica acumularon centenares de miles de estudios de casos de familias en lo que George Buzelle, secretario general de la Oficina de Organizaciones Benéficas de Brooklyn, catalogó como un esfuerzo por «clasificar a todas las familias humanas en función de su intelecto, desarrollo, mérito y demérito, y etiquetarlas para su indización y archivo». ¹¹

El movimiento fusionaba las inquietudes de las élites acerca de la pobreza entre los blancos con los temores ante una inmigración creciente y las creencias racistas de que los afroamericanos eran una raza inherentemente inferior. Las manifestaciones populares de la teoría eugenésica reprodujeron y alimentaron estas distinciones: se expulsó a los afroamericanos, los blancos adinerados descendientes de noreuropeos ocuparon el pináculo de la jerarquía eugenésica y todos cuantos se situaban en los estratos intermedios fueron considerados sospechosos. En los concursos para seleccionar a la «familia más apta» celebrados en las exposiciones eugenésicas de las ferias estatales siempre se imponían personas con piel de alabastro. Las hordas con dificultades económicas, representadas como desagües del tesoro público, solían racializarse: los linajes genéticos «degenerados» siempre tenían la piel oscura, cejas bajas y rasgos anchos.

Tal vez las restricciones generalizadas a la reproducción fueron el destino inevitable de la caridad científica y la eugenesia. Es

⁸ Richmond, 1917, p. 39.

⁹ Almy, 1910, p. 31.

¹⁰ Lombardo, 2008, p. 128.

¹¹ Trattner, 1999, p. 100.

célebre el dato de que, en el caso de Buck contra Bell, que legalizó la esterilización involuntaria, el magistrado de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes escribió: «Lo mejor para el mundo es que, en lugar de esperar a ejecutar a la prole degenerada por delinquir o dejarlos morir de hambre por su incapacidad, la sociedad evite que quienes son manifiestamente indignos perpetúen la especie. El principio que sustenta la vacunación obligatoria es lo bastante amplio para cubrir el corte de las trompas de Falopio».¹² Y aunque la práctica cayó en desgracia a la luz de las atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia se saldó con más de sesenta mil esterilizaciones obligatorias de personas pobres y de la clase obrera de Estados Unidos.

A diferencia de los asilos integrados de manera intermitente, la caridad científica consideraba la pobreza de los afroamericanos un tema aparte de la pobreza blanca y, según el historiador social Mark Peel, «desatendía de manera más o menos deliberada lo que los estadounidenses de finales del siglo XIX denominaban el “problema de los negros”».¹³ De ahí que el movimiento ofreciera unos recursos mínimos a un reducido número de pobres blancos «que los merecían». Aplicaban técnicas de investigación y tecnología puntera para desalentar la solicitud de ayudas por parte de cualquier otra persona. Y cuando todo lo demás fallaba, la caridad científica recurría a la institucionalización: quienes no se consideraban lo bastante puros para recibir su caridad o lo bastante fuertes para valerse por sí mismos eran enviados al asilo.

El movimiento de la caridad científica contaba con multitud de nuevos inventos: el asistente social, la investigación para la concesión de ayudas, los registros eugenésicos y el mecanismo de intercambio de información. Aprovechaba lo que tanto abogados como académicos y doctores consideraban la ciencia empírica más sofisticada de su época. La caridad científica reclamaba una práctica fundamentada en pruebas para distinguirse de lo que sus defensores consideraban los planteamientos políticos ingenuos,

¹² 274 U.S. 200 (1927), Justia U.S. Supreme Court Center, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/274/200/case.html#207>. [Consultado el 21 de julio de 2017].

¹³ Peel, 2007, p. 133.

sentimentales y corruptos del pasado para la concesión de asistencia a los necesitados. No obstante, las herramientas de tecnología avanzada y los argumentos científicos del movimiento solo eran en realidad sistemas para restar poder a los pobres y a la clase trabajadora, privándolos de sus derechos humanos y de su autonomía. Si el asilo era una máquina que desviaba a los pobres y a la clase trabajadora de las ayudas públicas, la caridad científica fue una técnica que dio alas a la negación plausible entre las élites.

Al igual que los hospicios que la precedieron, la caridad científica imperó en la gestión de las ayudas a los pobres durante dos generaciones. Sin embargo, este potente movimiento no sobrevivió a la Gran Depresión. En el punto álgido de esta última, se calcula que entre trece y quince millones de estadounidenses perdieron sus empleos, con una tasa de paro que rozaba el 25 por ciento en todo el país y que llegó al 60 por ciento en algunas ciudades. Familias que habían formado parte de una sólida clase media antes del crac recurrieron a la asistencia social por primera vez en su vida. La ya de por sí borrosa frontera entre quienes merecían recibir ayuda y quienes no se desvaneció frente a la emergencia nacional.

Conforme la Gran Depresión se agravó en los años 1930 y 1931, la caridad científica quedó desbordada. Las colas de personas esperando comida se multiplicaron, las familias desahuciadas se hacinaron en apartamentos compartidos y posadas municipales, y los programas de ayuda de emergencia se desmoronaron frente a las abrumadoras necesidades de la población. Pobres y trabajadores protestaron por el deterioro de sus condiciones de vida y se unieron para ayudarse mutuamente.

Miles de parados se organizaron para saquear comercios; los mineros robaron y distribuyeron carbón de contrabando. Había colas de racionamiento de pan, de sopa y de col. Tal como describen Frances Fox Piven y Richard Cloward en *Regulating the Poor*, los manifestantes hostigaron a los organismos de asistencia locales formando piquetes a sus puertas, increpándolos y negándose a marcharse hasta que entregasen dinero y artículos de consumo a las multitudes congregadas. Quienes se declararon en huelga de alquiler resistieron a las ejecuciones hipotecarias y los desahucios

y revirtieron los cortes de gas y electricidad. En 1932, los 43.000 manifestantes del Bonus Army¹⁴ acamparon cerca del Capitolio, en parcelas libres y a orillas del río Potomac.

Franklin D. Roosevelt llegó a la presidencia durante esta oleada de descontento ciudadano y restituyó de manera masiva la concesión de ayudas externas mediante la Administración Federal de Ayuda de Emergencia (FERA),¹⁵ un programa que distribuía artículos de consumo y dinero en efectivo a las familias necesitadas. Su Gobierno creó asimismo programas de empleo, como el Cuerpo Civil de Compensación (CCC)¹⁶ y la Administración de Obras Civiles (CWA),¹⁷ mediante los cuales se empleó a parados en proyectos de mejora de las infraestructuras, en construcción de instalaciones públicas, en la Administración gubernamental y en servicios de asistencia sanitaria, educación y arte.

El New Deal invirtió la tendencia hacia la caridad privada y, en torno a principios de 1934, programas federales como la FERA, el CCC y la CWA ayudaban a veintiocho millones de personas proveyendo empleo y ayudas económicas. Dichos programas tuvieron la capacidad de proporcionar ayuda a tantas personas en tan poco tiempo porque se invirtieron los fondos públicos necesarios (4.000 millones de dólares en el caso de la FERA) y porque se abandonaron las investigaciones en profundidad lideradas por los asistentes sociales de la caridad científica.

Como había ocurrido durante las depresiones de 1819 y 1873, sus detractores culparon a los programas de ayuda de crear dependencia de la asistencia social. El propio Roosevelt tenía serias reticencias con respecto a involucrar al Gobierno federal en la provisión de ayudas directas. De hecho, no tardó en capitular ante la reacción violenta de las clases medias y clausuró la FERA, el programa que proporcionaba dinero en efectivo y artículos de

¹⁴ El Bonus Army [Ejército de Bonificación], estaba formado por diecisiete mil veteranos de la Primera Guerra Mundial que, junto a sus familias, se instalaron en 1932 frente al Capitolio para exigir el cobro anticipado de sus bonos por los servicios prestados, cuyo pago estaba previsto para 1945. (N. de la T.)

¹⁵ FERA: Federal Emergency Relief Administration. (N. de la T.)

¹⁶ CCC: Civilian Conservation Corps. (N. de la T.)

¹⁷ CWA: Civil Works Administration. (N. de la T.)

consumo, para sustituirlo por la Administración para el Progreso de las Obras (WPA).¹⁸ Frente a las protestas de algunos de los miembros de su gabinete, que exigían la creación de un departamento federal de bienestar, la Administración pasó de distribuir recursos a incentivar el empleo.

Es indiscutible que la legislación del New Deal salvó miles de vidas y evitó que millones de estadounidenses cayeran en la indigencia. Las nuevas leyes laborales propiciaron el florecimiento de los sindicatos y la consolidación de una potente clase media blanca. La Ley de la Seguridad Social de 1935 establecía el principio de los pagos en efectivo en caso de desempleo, edad avanzada o pérdida del sostén de la familia, y lo hacía por derecho, no en base a ningún criterio moral individual. No obstante, el New Deal también creó divisiones de raza, género y clase que continúan generando desigualdades en la sociedad actual.

La capitulación de la administración Roosevelt frente a la supremacía blanca sigue generando sus amargos frutos. El Cuerpo Civil de Compensación limitó la participación de la población negra en las ayudas laborales con financiación federal a un 10 por ciento de los empleos disponibles, pese a que los afroamericanos registraban un 80 por ciento de tasa de desempleo en las ciudades norteamericanas. La Ley Nacional de Vivienda de 1934 redobló la presión en los barrios negros fomentando la segregación residencial y alentando prácticas discriminatorias en la concesión de hipotecas. La Ley Wagner garantizaba a los trabajadores el derecho a organizarse, pero únicamente contemplaba la formación de sindicatos segregados. Y lo que es más importante: ante la amenaza de que los estados sureños no apoyaran la Ley de la Seguridad Social, tanto los trabajadores del campo como el personal doméstico fueron explícitamente excluidos de las protecciones laborales que ofrecía. El «compromiso sureño» dejó a la gran mayoría de los trabajadores afroamericanos (y a un número no insignificante de agricultores arrendatarios, aparceros y empleados domésticos blancos pobres) sin un salario mínimo, sin protección contra el desempleo, sin seguro de vejez o sin el derecho a la negociación colectiva.

¹⁸ WPA: Works Progress Administration. (N. de la T.)

Asimismo, los programas del New Deal consagraban al hombre como sostén de la familia y de las mujeres. Las protecciones federales estaban vinculadas a los salarios, la afiliación a sindicatos, el seguro de desempleo y las pensiones. Con todo, al incentivar el trabajo asalariado a largo plazo, a tiempo completo y durante todo el año, las protecciones privilegiaban los patrones de empleo masculino frente al femenino. Otro célebre programa del New Deal, la Ayuda a Niños Dependientes (ADC,¹⁹ denominada Ayuda a Familias con Niños Dependientes o AFDC²⁰ después de 1962), se estructuró para dar apoyo a un número reducidísimo de viudas con hijos tras la muerte de su marido y cabeza de familia. De este modo, la seguridad económica de las mujeres quedó atada a su papel como esposas, madres o viudas, y se garantizó así su dependencia económica continuada.

El diseño de las políticas asistenciales del New Deal restableció la división entre los pobres capaces y los incapaces. Ahora bien, invirtió el guion de Josiah Quincy. Los pobres capaces seguían siendo hombres blancos asalariados que se habían visto abocados al desempleo. Pero, en una inversión de los cien años precedentes de políticas de la pobreza, de pronto se los consideraba pobres «dignos» de recibir ayudas y se les ofrecía asistencia federal para reinsertarse en el mercado laboral. Los pobres incapaces seguían siendo quienes afrontaban desafíos a largo plazo para acceder a un empleo estable: discriminación racial, monoparentalidad, discapacidad o enfermedad crónica. Sin embargo, se consideró que no merecían recibir ayudas y únicamente se les ofreció, a regañadientes, asistencia temporal, punitiva y avara.

La mano de obra excluida, las madres solteras, los ancianos pobres, los enfermos y los discapacitados se vieron obligados a depender de lo que la historiadora del bienestar Premilla Nadasen denomina programas de asistencia pública «de limpieza».^{21, 22} Las distinciones entre los desempleados y los pobres, entre la pobreza

de los hombres y la de las mujeres, entre los obreros blancos y hombres y el resto de las personas creó un estado del bienestar de doble nivel: la seguridad social por un lado y la asistencia social por el otro.

Los programas de asistencia social eran menos generosos, porque los niveles de las prestaciones los establecían los estados y los municipios, no el Gobierno federal. Y eran más punitivos, porque las autoridades locales y estatales del bienestar social redactaban leyes de elegibilidad y tenían incentivos financieros para mantener sus inscripciones en niveles bajos. Además, eran más intrusivos, porque los límites de renta y la comprobación de medios justificaba todo tipo de control e investigación de los solicitantes y beneficiarios.

Al distinguir entre seguridad social y asistencia social, los demócratas del New Deal plantaron las semillas de la desigualdad económica actual, cedieron ante la supremacía blanca, sembraron el conflicto entre los pobres y la clase obrera y devaluaron el trabajo femenino. Y al abandonar la idea de un programa de ayudas universal, Roosevelt resucitó las investigaciones, las prácticas de control y los desvíos de las ayudas de la caridad científica. Ahora bien, en lugar de dirigirse hacia el amplio espectro de los pobres y la clase trabajadora, estas técnicas se aplicaron de manera selectiva a un nuevo grupo objetivo que empezaba a emerger, formado por las que llegarían a ser conocidas como «las madres del bienestar».

Pese a que todos los programas creados por la Ley de la Seguridad Social se consideran propiamente asistencia social, el programa «de limpieza» más polémico, la Ayuda a Niños Dependientes, se ha convertido en sinónimo de «ayuda al bienestar». De no ser por el papel que acabó desempeñando como punto focal del fructífero movimiento político masivo de las mujeres pobres, la Ayuda a (Familias con) Niños Dependientes habría acabado siendo una nota al pie de la historia. Durante sus primeros treinta y cinco años, el programa se destinó exclusivamente a las viudas blancas de clase media. Muy pocas familias lo solicitaron, y en torno a la mitad de las solicitudes fueron desestimadas.

La legislación estatal y de los condados excluía a un inmenso número de personas que reunían los requisitos para solicitarlos,

¹⁹ ADC: Aid to Dependent Children. (N. de la T.).

²⁰ AFDC: Aid to Families with Dependent Children. (N. de la T.).

²¹ «Mop-up» en el original.

²² Nadasen, 2012, p. 18.

cf. los valores familiares

sobre todo mujeres de color. La legislación relativa a las «madres capacitadas para trabajar» excluía a las empleadas domésticas y trabajadoras del campo, ya que los legisladores consideraban que el desempeño de su trabajo asalariado era más importante que criar a sus hijos. La legislación relativa a «hogares adecuados» excluía a las madres solteras, a las divorciadas y abandonadas, a las lesbianas y a otras mujeres consideradas sexualmente inmorales por los departamentos de bienestar social. La legislación de «padre sustituto» establecía que cualquier hombre que mantuviera una relación con una mujer que recibiera asistencia pública pasaba a ser económicamente responsable de los hijos de esta. Las restricciones a la residencia negaban las prestaciones a cualquier persona que cruzara las fronteras estatales. El sistema del bienestar exigía a los pobres entregar sus derechos (a la integridad física, a un entorno laboral seguro, a la movilidad, a la participación política, a la privacidad y a la autodeterminación) a cambio de exiguas ayudas para sus familias.

cf. Tom - part

Las leyes discriminatorias que determinaban quién podía optar a las ayudas conferían a los asistentes sociales un amplio margen para investigar las relaciones de los usuarios, indagar en todos los aspectos de sus vidas e incluso hacer redadas en sus viviendas. En 1958, la policía y los asistentes sociales de Sweet Home, una pequeña comunidad de clase trabajadora blanca de Oregón, planificaron una serie de incursiones en colaboración que se llevaron a cabo entre medianoche y las cuatro y media de la madrugada. En 1963, los asistentes sociales del condado de Alameda (California) invadieron los hogares de setecientos receptores de subsidios una fría noche de enero y sacaron a madres e hijos de sus camas en un intento por descubrir a amantes mantenidos en secreto. Las víctimas denunciaron que los asaltantes no se habían identificado, habían empleado de manera innecesaria lenguaje impropio e «incluso habían derribado puertas cuando se les había negado la entrada», informaba Howard Kennedy en el *Los Angeles Times*. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP)²³ denunció que las redadas de Alameda se «perpetraron

²³ NAACP: National Association for the Advancement of Colored People. (N. de la T.).

principalmente contra receptores de la ANC [Ayuda a Niños Necesitados]²⁴ negros y mexicano-estadounidenses y que podían tener motivaciones discriminatorias».²⁵

La recuperación de las investigaciones al estilo de la caridad científica de los receptores de las Ayudas a Familias con Niños Dependientes fue una reacción a los patrones migratorios cambiantes y al activismo en defensa de los derechos civiles, que estaban alterando la composición racial del programa. Más de tres millones de afroamericanos se refugiaron en ciudades norteañas entre 1940 y 1960 huyendo del terrorismo supremacista blanco y de los desahucios de los aparceros. Muchos de ellos hallaron viviendas más seguras y mejores empleos, y recuperaron su dignidad y un mayor grado de libertad. Sin embargo, la discriminación en el entorno laboral y en el ámbito de la vivienda y la educación derivó en tasas de desempleo muy superiores entre la población no blanca, lo que llevó a los migrantes a solicitar ayudas públicas para mantener a sus familias.

En paralelo, el movimiento de defensa de los derechos civiles articuló el derecho moral al acceso igualitario a la vivienda pública y a la participación política de los afroamericanos. El argumento en el que se cimentaba la integración en las escuelas públicas y la ampliación del voto se extrapoló fácilmente a la integración en la asistencia social. El grupo de Madres por un Bienestar Adecuado, uno de los primeros que lucharon por el derecho al bienestar, se formó después de que algunas de sus integrantes participaran en la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963. Según la historiadora Premilla Nadasen, aquella manifestación las inspiró para combatir las humillaciones y discriminaciones que sufrían a diario por el hecho de ser madres negras que recibían ayudas del sistema del bienestar y regresaron a Boston dispuestas a poner en marcha un programa de distribución de alimentos.²⁶ A lo largo y ancho del país, organizaciones locales se unieron para dar forma a un movimiento nacional que puso en entredicho un *statu*

²⁴ ANC: Aid to Needy Children. (N. de la T.).

²⁵ Kennedy, 1963.

²⁶ Nadasen, 2012, p. 12.

que injusto: al menos la mitad de las personas que reunían los requisitos para recibir la Ayuda a Familias con Niños Dependientes no la estaban percibiendo.

El movimiento en defensa de los derechos de bienestar social compartió información acerca de los criterios para poder acceder a las ayudas, ayudó a rellenar solicitudes, hizo sentadas en oficinas de bienestar social para denunciar prácticas discriminatorias, ejercicio de grupo de presión en las legislaturas, elaboró propuestas políticas y puso en tela de juicio todas las presuposiciones que los programas del New Deal habían dado por sentadas. Y lo que es aún más importante, sus integrantes insistieron en que criar a los hijos era «un trabajo». Y aunque apoyaban el derecho de la mujer a tener un empleo asalariado si así lo quería, las organizaciones de defensa de los derechos del bienestar se oponían de manera activa a todos los programas que exigían que las madres solteras con hijos pequeños tuvieran un trabajo fuera del hogar.

Los éxitos del movimiento en defensa de los derechos de bienestar social fueron extraordinarios. Para empezar, dio a luz a la Organización Nacional de Derechos de Bienestar (NWRO),²⁷ que llegó a contar con treinta mil afiliados. Obtuvo acceso a ayudas especiales para adquirir mobiliario, uniformes escolares y otros artículos del hogar. Y fue la punta de lanza de la batalla por la concesión de una renta mínima garantizada a todas las familias pobres, con independencia de su estado civil, raza o situación laboral. Y al poner de relieve que la exclusión de las madres solteras y las mujeres negras de la asistencia social era inconstitucional, el movimiento también articuló impugnaciones jurídicas para revertir las leyes de elegibilidad discriminatorias.

La victoria en el caso King contra Smith (1968) anuló la legislación del «padre sustituto» y garantizó los derechos básicos a la privacidad personal y sexual. En el caso Shapiro contra Thompson (1969), la Corte Suprema acordó que las normas de residencia eran restricciones inconstitucionales al derecho a la movilidad de las personas. La sentencia del caso Goldberg contra Kelly (1970) consagró el principio de que los receptores de asistencia social

²⁷ NWRO: National Welfare Rights Organization. (N. de la T.).

tienen derecho al respeto de sus garantías procesales y estableció que los beneficios no pueden rescindirse sin atender al principio de derecho de defensa. Estas victorias legales sentaron un precedente verdaderamente revolucionario: los pobres tenían los mismos derechos que la clase media.

La Ayuda a Familias con Niños Dependientes sufrió ataques por tantos frentes que, en 1969, el presidente Richard Nixon propuso reemplazarla por un programa de renta anual garantizada, el Programa de Asistencia Familiar (FAP)²⁸. Dicho programa debía garantizar una renta mínima de mil seiscientos dólares anuales a las familias de cuatro miembros, proporcionar subsidios a las familias biparentales con salarios bajos que quedaban excluidas de la Ayuda a Familias con Niños Dependientes y poner fin a la penalización del cien por cien a las rentas del trabajo, en virtud de lo cual los beneficiarios de subsidios de bienestar podrían quedarse los primeros setecientos veinte dólares de sus ingresos anuales sin ver reducidas las prestaciones.

Aun así, la renta mínima propuesta por Nixon habría mantenido a una familia de cuatro miembros por debajo del umbral de la pobreza. La Organización Nacional de Derechos de Bienestar la contrarrestó con su propuesta para una Ley de Renta Adecuada, que fijaba en 5.500 dólares la renta básica para una familia de cuatro miembros. Por otro lado, el programa de Nixon contemplaba el requisito de tener un empleo, un punto de fricción para las madres solteras con hijos pequeños. El Programa de Asistencia Familiar, tan impopular entre conservadores como entre progresistas, fracasó, y la presión sobre la Ayuda a Familias con Niños Dependientes no hizo sino aumentar.

Espoleadas por los movimientos sociales, más familias solicitaron asistencia pública. El respaldo de las victorias legales tuvo como consecuencia que se denegaran muchas menos solicitudes. Conforme los límites a la elegibilidad se derribaban, la Ayuda a Familias con Niños Dependientes se ampliaba. Las cifras eran pasmosas: de los 3,2 millones de receptores de la ayuda en 1961 se pasó

²⁸ FAP: Family Assistance Program. (N. de la T.).

a casi diez millones en 1971. La inversión federal en el programa se incrementó de 1.000 millones (en dólares de 1971) a 3.300 millones de dólares a lo largo de esa década. La mayor parte de lo obtenido por el movimiento se destinaba a los niños pobres. En 1966, solo una cuarta parte de los niños pobres recibían subsidios de la Ayuda a Familias con Niños Dependientes; en 1973, el programa llegaba a más de cuatro quintas partes de ellos.

Los miembros de la Organización Nacional de Derechos de Bienestar eran en su inmensa mayoría mujeres afroamericanas pobres, pero el movimiento en defensa de los derechos de bienestar social contaba con aliados en la clase media y consideraba la organización interracial como un factor crucial para conseguir sus objetivos a largo plazo. Como reflejo de su desproporcionada vulnerabilidad ante la pobreza, los afroamericanos representaban aproximadamente el 50 por ciento de las nóminas de la Ayuda a Familias con Niños Dependientes en 1967. Aun así, Johnnie Tillmon, la primera presidenta de la Organización Nacional de Derechos de Bienestar, reconocía que los blancos receptores de prestaciones padecían igualmente la penuria y eran aliados potenciales. Tal como explicó en una entrevista en 1971: «No podemos permitirnos la segregación racial. Las niñas blancas pobres me explican qué sienten cuando tienen hambre, y es lo mismo que siento yo».²⁹

Ahora bien, mientras que los defensores de los derechos del bienestar social contemplaban con buenos ojos la integración y la solidaridad, la oposición a la expansión de la Ayuda a Familias con Niños Dependientes estimuló la animosidad de la clase media, que dio la espalda a los éxitos del movimiento. Conforme crecía la animadversión hacia los derechos del bienestar social, la cobertura en prensa de la pobreza fue volviéndose cada vez más crítica. «A medida que las noticias acerca de los desamparados adoptaban un sesgo menos compasivo, la prensa se llenaba de imágenes de negros pobres»,³⁰ escribe el científico político Martin Gilens. Era habitual que las noticias acerca de fraudes a la asistencia social y malas praxis fueran acompañadas de imágenes de rostros negros.

²⁹ *Ibid.*, p. 107.

³⁰ Gilens, 2003, p. 102.

La pobreza entre la comunidad afroamericana descendió de manera espectacular durante la década de 1960, y la proporción de expedientes de la Ayuda a Familias con Niños Dependientes de afroamericanos cayó en picado. En contraposición, el porcentaje de afroamericanos representados en las noticias de la prensa acerca de la pobreza ascendió de un 27 a un 72 por ciento entre 1964 y 1967.

La histeria en torno a los costes de la asistencia social, el fraude y la ineficacia fue en aumento hasta que se produjo la recesión de 1973. Ronald Reagan y otros políticos conservadores lideraron una revuelta de los contribuyentes contra la Ayuda a Familias con Niños Dependientes, poniendo en entredicho la idea de que los pobres tenían derecho a disfrutar de todos los derechos prometidos por la Constitución. Con todo, puesto que los éxitos del movimiento en defensa de los derechos a la asistencia social habían quedado consagrados en la legislación, fue imposible excluir de la asistencia pública a las personas en función de criterios de elegibilidad discriminatorios.

Los funcionarios electos y los burócratas estatales, atrapados entre unas protecciones legales cada vez más estrictas y las exigencias de contener el gasto en asistencia social, escenificaron un truco de prestidigitación político. Encargaron nuevas y costosas tecnologías que prometían ahorrar gastos mediante una distribución más eficaz de las ayudas. En la práctica, esos sistemas tecnológicos funcionaron como muros erigidos entre la población pobre y sus derechos legales. Había nacido el asilo digital.

A principios de la década de 1970, los ordenadores ganaron terreno como herramientas para reducir el gasto público aumentando el control y la supervisión de los receptores de prestaciones sociales. En 1943, Luisiana había sido el primer estado en establecer la norma de la «madre en edad activa», que impedía a la mayoría de las mujeres afroamericanas recibir la Ayuda a Niños Dependientes. Treinta y un años después, Luisiana se convirtió en el primer estado en poner en funcionamiento un sistema de correspondencia salarial informatizado. Dicho programa cotejaba los ingresos declarados por el solicitante de la prestación social con los archivos electrónicos de las agencias de empleo y los datos de subsidios de compensación por desempleo.

En la década de 1980, los ordenadores recopilaban, analizaban, almacenaban y compartían ya una cantidad extraordinaria de datos sobre las familias que recibían ayudas públicas. El Departamento Federal de Sanidad, Educación y Bienestar (HEW)³¹ compartía el nombre, el número de la seguridad social, la fecha de nacimiento y otras informaciones de los receptores de subsidios con el Departamento de Defensa, los Gobiernos estatales, las empresas federales, los juzgados de lo penal y de lo civil, organismos locales de bienestar social y el Departamento de Justicia. Los nuevos programas buscaron incoherencias en el creciente número de expedientes. Se programaron y pusieron en funcionamiento meticolosos programas de detección de fraudes. Se conectaron entre sí las bases de datos para llevar un seguimiento del comportamiento y el gasto de los receptores en distintos programas sociales. El conflicto entre los crecientes derechos legales de los beneficiarios de la asistencia social y el debilitamiento del apoyo a la ayuda pública se resolvió mediante una oleada de herramientas de alta tecnología.

Dado que los programas de asistencia social reciben financiación federal pero se controlan a nivel local, la incorporación de tecnología para la gestión de las ayudas al bienestar variaba en función del estado. Con todo, la pauta que siguió Nueva York proporciona un ejemplo esclarecedor. Nueva York contaba con el movimiento en defensa de los derechos de bienestar social más multitudinario y reivindicativo, y sus registros de Ayuda a Familias con Niños Dependientes habían experimentado el crecimiento más acelerado de todo el país. A finales de la década de 1960, uno de cada diez beneficiarios de subsidios sociales residía en la ciudad de Nueva York, donde había entre sesenta y ochenta grupos locales de defensa de los derechos al bienestar.

El movimiento puso en marcha una campaña de manifestaciones diarias por toda la ciudad en la primavera de 1968, incluida una sentada de tres días en la sede del Departamento de Bienestar a la que puso fin la policía montada. Influidos por un activismo

³¹ HEW: Department of Health, Education and Welfare. (N. de la T.).

tan visible, los asistentes sociales empezaron a replantearse su papel, de tal manera que en lugar de entender que debían desalentar a los solicitantes de las ayudas públicas, optaron por ayudarlos a solicitarlas. Según un informe del Instituto RAND de 1973 titulado *Protest by the Poor*, los asistentes sociales del Bronx y Brooklyn amenazaron con ir a la huelga a menos que el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad «redujera el papeleo para procesar la avalancha de solicitudes de usuarios».³²

En 1969, el estado de Nueva York solicitó participar en el Proyecto Piloto Nacional,³³ un proyecto del Departamento Federal de Sanidad, Educación y Bienestar destinado a crear un «sistema informatizado de gestión de la información para la administración de las ayudas públicas al bienestar». En aquel entonces, el gobernador republicano Nelson Rockefeller estaba convencido de que se aprobaría el Programa de Asistencia Familiar de Nixon y los problemas estatales relacionados con el bienestar se resolverían mediante la asunción por parte de la Administración federal de los costes de las ayudas al bienestar estatales y locales.

No obstante, cuando el Congreso rechazó el Programa de Asistencia Familiar en 1970, Rockefeller anunció que a Nueva York «no le quedaba más alternativa que continuar haciendo cuanto estuviera en su mano para satisfacer las necesidades de su población pobre», al tiempo que calificó el sistema del bienestar estatal del momento como «desfasado» y como «una carga tremenda». Pocos meses más tarde, en una declaración ante el Parlamento, expuso su preocupación por el hecho de que, si no se cambiaba de arriba abajo el sistema de asistencia social, «acabaría por sobrecargar y descomponer nuestra sociedad», porque «en lugar de alentar la dignidad humana, la independencia y la responsabilidad individual, el sistema, tal como funciona, incita a una dependencia permanente del Gobierno».³⁴

Rockefeller anunció un paquete de reformas de la asistencia social en todo el estado que establecía el requisito de un año de

³² Jackson y Johnson, 1973, p. 201.

³³ Nationwide Demonstration Project. (N. de la T.).

³⁴ Rockefeller, 1959.

residencia obligatorio y proponía «un plan de realojo voluntario», ofreciendo a los actuales beneficiarios de ayuda social transporte y un bono en efectivo si accedían a cambiar de estado. Las reformas que proponía exigían que los receptores de ayudas aceptaran cualquier empleo que se les ofreciera o, de lo contrario, perderían los subsidios, y eliminaba la valoración de los asistentes sociales a la hora de decidir qué perceptores de prestaciones «podían trabajar» y cuál debía ser la cuantía de las ayudas. Rockefeller revocó los requisitos de salario mínimo para asistentes sociales, redujo las cualificaciones educativas para acceder a ese empleo y endureció las sanciones contra los asistentes sociales «que ayudan de manera impropia a los beneficiarios de ayudas sociales para que presenten los requisitos debidos y reciban subsidios adicionales».

Asimismo, Rockefeller fundó la Oficina del Inspector General de la Administración de las Ayudas al Bienestar y colocó al frente al encargado de su campaña de recaudación de fondos, George F. Berlinger. En el primer informe anual de la oficina, emitido en febrero de 1972, Berlinger denunció que la mala gestión administrativa había permitido que una «plaga de estafas, fraudes y aprovechados» infectaran los registros de las ayudas sociales de la ciudad. «En la actualidad se está llevando a cabo una intervención quirúrgica a gran escala», añadió.

Berlinger propuso crear un registro informático centralizado para cada receptor de prestaciones sociales, del Medicaid³⁵ y de cupones de alimentos del estado. Los responsables de planificación incluyeron en el diseño del sistema la obsesión de Rockefeller por poner fin a los «chollos» de las ayudas sociales. El estado contrató a la empresa de Ross Perot, Electronic Data Systems, para que creara una herramienta digital que «redujera los fraudes, la mala gestión y los casos de inelegibilidad bien documentados en la administración de la asistencia social», automatizara los cálculos de los subsidios y las determinaciones de quién podía optar a ellos y «mejorara la supervisión estatal» de la toma de decisiones a escala local.³⁶ El diseño, el desarrollo y la implementación del

³⁵ Seguro médico estatal para personas de bajos ingresos. (N. de la T.).

³⁶ New York State Department of Social Services, 1975, p. 1.

Sistema de Gestión del Bienestar (WMS)³⁷ resultante acabó costando 84,5 millones de dólares.

El rápido aumento de los beneficiarios de la asistencia social en Nueva York se estabilizó a mediados de la década de 1970, a medida que el Sistema de Gestión del Bienestar fue instaurándose. A partir de entonces, la proporción de personas pobres que recibían la Ayuda a Familias con Niños Dependientes empezó a caer en picado. El mismo patrón se repitió estado tras estado. Una combinación de nuevas leyes restrictivas y herramientas de tecnología avanzada revirtieron los avances conseguidos por el movimiento en defensa de los derechos a las ayudas sociales. En 1973, casi la mitad de las personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza en Estados Unidos recibían la Ayuda a Familias con Niños Dependientes. Una década después, tras la introducción de las nuevas tecnologías para la administración de las prestaciones, la proporción había descendido a un 30 por ciento. En la actualidad no llega al 10 por ciento.

La Ley de Responsabilidad Personal y Conciliación de Oportunidades Laborales (PRWORA)³⁸ de 1996 suele considerarse la responsable de la desaparición de las ayudas sociales. La PRWORA sustituyó la Ayuda a Familias con Niños Dependientes por la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas e impuso el empleo fuera de casa a todo coste. La Asistencia Temporal a Familias Necesitadas limitaba el acceso a ayudas públicas a sesenta meses (con contadas excepciones), introducía requisitos laborales estrictos, ponía fin a las subvenciones de cuatro años para la educación universitaria e implementaba un amplio abanico de sanciones para penalizar el incumplimiento de tales obligaciones.

Por ejemplo, se imponen sanciones por llegar tarde a una cita, por no acudir a un trabajo como voluntario, por no asistir a una formación laboral, por no someterse a un test antidrogas, por saltarse una visita con el psicólogo o por desatender cualquier actividad terapéutica o de formación laboral prescrita por un asistente

³⁷ WMS: Welfare Management System. (N. de la T.).

³⁸ PRWORA: Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. (N. de la T.).

social. Cada sanción puede acarrear la pérdida temporal o permanente de los subsidios.

Ciertamente, la Ley de Responsabilidad Personal y Conciliación de Oportunidades Laborales logró una contracción asombrosa de la asistencia pública. Cerca de 8,5 millones de personas quedaron excluidas de las listas de la asistencia social entre 1996 y 2006. En 2014 recibían prestaciones en metálico menos adultos que en 1962. En 1973, cuatro de cada cinco niños pobres recibían la Ayuda a Familias con Niños Dependientes; en la actualidad, la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas se otorga a menos de uno de cada cinco.

Ahora bien, el proceso de reducir las listas empezó mucho antes de que Bill Clinton prometiera «acabar con el sistema de asistencia pública tal como lo conocemos». Métodos de investigación más agresivos y unas tecnologías de rastreo cada vez más precisas proporcionaron la materia prima para crear historias apócrifas acerca del fraude y la corrupción generalizados. Dichas historias dieron luz a normativas aún más punitivas y a sanciones draconianas, que a su vez exigieron una explosión de tecnologías basadas en datos para supervisar su cumplimiento. Las reformas federales de 1996 únicamente pusieron la guinda a un proceso iniciado veinte años antes, cuando la oposición a los derechos a percibir ayudas públicas engendró el asilo digital.

Los defensores de la adopción de la automatización y los algoritmos por parte de los servicios sociales suelen describir la nueva generación de herramientas digitales como «disruptivas». Explican que los datos masivos, el *big data*, agilizan los rígidos procesos burocráticos, estimulan la adopción de soluciones innovadoras y fomentan la transparencia. Pero cuando nos centramos en programas dirigidos específicamente a los pobres y la clase trabajadora, el nuevo régimen de análisis de datos tiene más de evolución que de revolución. Se trata, simple y llanamente, de una ampliación y continuación de unas estrategias de gestión de la pobreza moralistas y punitivas aplicadas desde la década de 1820.

La historia de los asilos para menesterosos y la caridad científica demuestra que las ayudas a la pobreza pasan a ser punitivas y

se estigmatizan en épocas de crisis económica. Las personas pobres y de clase obrera se oponen a las restricciones de sus derechos, desmantelan instituciones discriminatorias y suman fuerzas para ayudarse entre sí y sobrevivir. Sin embargo, una y otra vez se enfrentan a las reacciones violentas de la clase media. Las ayudas sociales se disfrazan de caridad, la ayuda mutua se reformula como dependencia y proliferan las nuevas técnicas para retrasar el progreso de los pobres.

Desde la década de 1970 ha ido ganando terreno paulatinamente un contramovimiento bien financiado y con un amplio apoyo popular cuyo objetivo es negar los derechos humanos básicos a los pobres y a las personas de clase obrera. Dicho movimiento fabrica y pone en circulación historias engañosas acerca de los pobres, a quienes califica de minoría inmoral, dependiente y fraudulenta que no merece las ayudas que recibe. Los conservadores críticos con el estado del bienestar mantienen una campaña propagandística muy eficaz para convencer a la población estadounidense de que la clase trabajadora y los pobres deben enfrentarse en un juego de suma nula por unos recursos limitados. De manera más discreta, los administradores de programas y los científicos de datos promueven herramientas de tecnología avanzada que prometen ayudar a más personas y de manera más humana, al tiempo que fomentan la eficiencia, detectan el fraude y contienen los costes. El asilo digital se presenta como un modo de racionalizar los subsidios, pero el objetivo real sigue siendo el de siempre: crear perfiles de pobres, controlarlos y castigarlos.

(1) Reformas más entre caridad científica y políticas antipobres